

La consulta plantea, si la Inspección General de Servicios puede reclamar del Servicio de Inspección fiscal, cuanta información sea necesaria para el desarrollo de sus funciones al amparo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

En primer lugar es preciso indicar que, la comunicación de datos solicitada constituye, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 i) de la citada Ley, una cesión de datos de carácter personal, definida como “Toda revelación de datos efectuada a persona distinta del interesado”.

En relación con esta cuestión, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica establece que “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.”. No obstante, el artículo 11.2.a) exceptúa de la obligación de recabar el consentimiento para dicha cesión aquellos supuestos en que la misma trae causa de lo establecido en una norma con rango de Ley.

En cuanto al alcance de la habilitación legal contenida en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, el artículo 10.2 a) del Reglamento de desarrollo, de la citada Ley Orgánica aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, viene a establecer que “será posible el tratamiento o la cesión de los datos de carácter personal sin necesidad del consentimiento del interesado cuando (...) lo autorice una norma con rango de Ley o una norma de derecho comunitario”. Añade el precepto que la habilitación tendrá lugar “cuando concurra uno de los supuestos siguientes:

- El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dichas normas, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
- El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del tratamiento cumpla un deber que le imponga una de dichas normas”.

En este sentido, cabe tomar en consideración lo indicado por esta Agencia en informe de 6 de marzo de 2001, en el mencionado informe se indicaba lo siguiente:



*“Respecto de la cesión o comunicación de datos, y siguiendo en este punto la referencia que la consultante efectúa de la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, rige (salvo en la cesión entre administraciones públicas para el desempeño de competencias similares) el principio de reserva de Ley, de tal modo que será necesario que, a falta de consentimiento, expreso o tácito cuando la Ley lo permita, del afectado, será necesaria la existencia de una habilitación legal que dé cobertura a la comunicación, pudiendo dicha habilitación incluso traer su causa de lo establecido en la propia Ley Orgánica 15/1999, tal y como sucede en los supuestos incluidos en los apartados b) a f) del artículo 11.2 de la misma.*

*Esta reserva de Ley debe ser interpretada, a la luz de lo indicado en la propia Sentencia citada (Fundamento Jurídico 11), en el sentido de que el legislador no podrá, sin más, efectuar una delegación genérica de los límites del derecho fundamental a la protección de datos en favor de otro de los poderes del Estado (en este caso el ejecutivo, como titular de la potestad reglamentaria). De este modo, cualquier norma reglamentaria que habilite una comunicación de datos deberá traer su causa de lo establecido en una disposición con rango de Ley que delimite claramente qué puede y qué no puede permitir o autorizar esa norma reglamentaria.*

*En consecuencia, no se consideraría suficiente una cobertura general a la cesión que previera la posibilidad de cesión “en los términos que reglamentariamente se determinen”, es decir, en los supuestos en que el ejecutivo tuviese por conveniente. Del mismo modo, y aunque el supuesto excede del ámbito de la presente consulta, no sería admisible una cesión de datos entre Administraciones Públicas amparada simplemente en el cumplimiento del principio de colaboración interadministrativa, diseñado en términos genéricos por el artículo 4.1 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.*

*Sin embargo, sí cabría considerar respetado el principio de reserva de Ley en aquéllos supuestos en que una norma con dicho rango establezca los requisitos generales de la cesión o dé cobertura a la misma, sin perjuicio de que dicha cesión sea posteriormente concretada, en cuanto a los aspectos procedimentales, en una norma con rango reglamentario. Como sería conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional la concreción por una norma reglamentaria del deber específico de colaboración entre dos Administraciones Públicas para el ejercicio por una de ellas de una determinada competencia si ese deber es delimitado claramente por una norma con rango de Ley”.*

En consecuencia, para que una cesión de datos pueda considerarse amparada en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999 será necesario que una norma con rango de Ley venga a perfilar el alcance y finalidad de dicha cesión, sin perjuicio de que la misma pueda, siempre dentro del marco perfilado, aclararse mediante el desarrollo reglamentario de dicha Ley. Por el contrario, no bastaría que la Ley se limitara a establecer una regla general de cesión sin aclarar su finalidad, su alcance o los destinatarios de la misma, quedando dicha delimitación, en su totalidad, pendiente de lo que dispusiera la norma reglamentaria.

En el supuesto planteado en la consulta a la que se acaba de hacer referencia, el establecimiento por la Ley reguladora del Gobierno y Administración de Extremadura permite considerar que dicha ley habilita a la Consejería correspondiente, para que mediante Decreto se concreten sus competencias para así dar cumplimiento a las finalidades previstas en la propia Ley, esto es, garantizar la mejora y calidad de los servicios de la Administración Extremeña.

En concreto la Ley 1/2001, de 28 de febrero del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde en su artículo 81 contempla que “1. La Administración de Extremadura organizará los servicios públicos bajo los principios de eficiencia y calidad, orientándolos a obtener la satisfacción del ciudadano por una resolución ajustada a derecho, rápida e igualitaria.

2. La aplicación de las nuevas tecnologías a la Administración estará orientada a la calidad de la misma y a obtener un servicio público próximo y fácil para el ciudadano.

3. La mejora de los servicios y de la calidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura se llevará a cabo a través de actividades de investigación, desarrollo y aplicación de métodos de simplificación de procedimientos, evaluación de la Administración, mejora estructural de los organigramas, del procedimiento, del trabajo y formación del personal.

4. La Consejería que ejerza las funciones de Presidencia tendrá la competencia de promover, coordinar y dotar de homogeneidad a las actividades de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura que se expresan en el apartado anterior.

5. Cada departamento, bajo la coordinación de la Consejería que ejerza las funciones de Presidencia, deberá ejecutar un plan anual de racionalización e inventario de procedimientos administrativos y calidad en la prestación de servicios.”

En cuanto a las funciones y habilitaciones que se otorgan a la Inspección General de Servicios, éstas se contemplan en el Decreto 3/1985, de 23 de enero, que trae causa en lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 2/1984 de 7 de junio, que señala “2. Las competencias que correspondan a la Presidencia

de la Junta de Extremadura en materia de organización administrativa, régimen jurídico y retributivo de la Función Pública, procedimientos e inspección de servicios serán ejercidas por la Consejería que ejerza las funciones de Presidencia”, esto es, delega en la Consejería de presidencia las competencias que corresponde a la Presidencia. Por su parte el mencionado Decreto prevé en su artículo 3 que “Compete a la Inspección General de Servicios y Coordinación a través del Consejero de Presidencia y trabajo las siguientes funciones: i) examinar los libros, expedientes, actas y demás documentos administrativos con el fin de comprobar que los procedimientos seguidos y los acuerdos adoptados se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ejerciendo una especial atención al estricto cumplimiento de los trámites y plazos establecidos.”

En consecuencia se considera que la cesión de la información por parte de la Inspección fiscal a la Inspección general de servicios se encuentra amparada legalmente en los textos legales anteriormente señalados.

No obstante la información recabada por la Inspección general de servicios sólo podrá utilizarse para las finalidades descritas en la consulta, esto es, la evaluación de la calidad del servicio de la Junta de Extremadura, debiendo por tanto respetarse el principio de finalidad recogido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999 que señala “Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.”